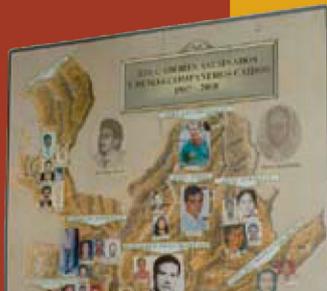


# La guerra en las aulas de Colombia

Violencia política contra Educadores Pág. E4-E5



# Cleaners Latinos en pie de lucha

Cómo los trabajadores explotados se organizan con o sin sindicatos para defender sus derechos Pág. E7



# FRONTLINE LATIN AMERICA

Abril - Junio 2009

PUBLICACIÓN DE LA CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

Vol 2 No 9

Precio £1.00

## ¡VIVA LA MINGA!

La Minga ha sido elegida en Colombia como “la Persona del Año” en 2008, para regocijo de la gente amante de la libertad. Pero, ¿quién

Robert Greene

es la Minga? Minga es un término tradicional indígena que significa “equipo especial de trabajo” que se organiza para realizar una tarea útil a la comunidad. En la actualidad, la defensa de la comunidad sólo puede ser llevada a cabo mediante la resistencia política, y el término significa a la vez un día de acción y una asamblea popular. La Minga de la Resistencia Indígena y Popular sirve pues para denominar a las masas que se organizan para participar en la configuración de su propio futuro.

Realizada desde el inicio de Octubre hasta el final de Noviembre, la Minga ha transformado una escena política que, dominada por el gobierno derechista del Presidente Álvaro Uribe Vélez, servía para jalear éxitos aclamados nacional e internacionalmente como la liberación el pasado Julio de Ingrid Betancourt y quince militares retenidos por la guerrilla de las FARC (sin importar que su liberación haya sido realizada mediante engaños y traiciones). Con Uribe triunfante, Colombia se sentía más que nunca atrapada firmemente en el puño de la máquina mediática patriótico-militar, mientras el ejército y los escuadrones de la muerte paramilitares continuaban con su sucio negocio de eliminar impunemente a sus oponentes.

Los habitantes originales de Colombia han sido reducidos hasta apenas el dos por ciento de la población. En el último número de Frontline Latin America se informaba de las evidencias presentadas ante el Tribunal Permanente de los Pueblos que indican que 18 de los 102 pueblos indígenas de Colombia están en peligro de desaparición. La represión genocida contra las comunidades indígenas no se ha acabado. No menos de 1,240 indígenas han sido asesinados y 53,885 han sido desplazados forzosamente en los seis años del gobierno de Uribe.



La Minga ha recuperado la iniciativa devolviéndosela de nuevo al pueblo, a la resistencia civil que se enfrenta a una alianza de oligarcas locales y compañías multinacionales que se están apoderando de las riquezas naturales de las comunidades. La Minga ha mostrado de nuevo la indomable inventiva de los oprimidos. Existía una pequeña ventana de oportunidad: con un horroroso historial de derechos humanos que estaba siendo tema de discusión en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Uribe tenía al menos que disimular mostrando un cierto respeto al derecho a la protesta por parte de sus ciudadanos.

Las principales demandas de La Minga son las siguientes:

- Rechazar el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y Europa;
- Denunciar leyes tales como el Estatuto de Desarrollo Rural, el Código de la Minería, y el Plan de Aguas que están permitiendo el expolio de los recursos naturales;
- El cese a la represión, no más terrorismo de estado y no más guerra, reparación para las víctimas;

- Cese a la infiltración de los paramilitares en el Congreso y en el ejecutivo;

- Completar los acuerdos previos con el Gobierno, especialmente aquellos realizados tras la masacre de Nilo, que permitan la devolución de las tierras robadas a los pueblos indígenas.

Desde comienzos de Octubre hubo protestas indígenas en varias regiones, pero fue el Valle del Cauca, al suroeste del país, el que se transformó en el foco de una movilización de masas en las calles que duró casi dos meses.

11 Oct: La Minga comienza el bloqueo de la Carretera Pan-Americana en la localidad de La María de Piedomá, lugar tradicional de reunión.

12 Oct: el 516° aniversario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, que supuso la desgracia para los 50 millones de indígenas, que pronto se vieron reducidos a una décima parte de su población original. La Minga crece hasta 12,000 personas. Como el bloqueo de la carretera continúa, los medios de comunicación nacionales empiezan a desacreditar a los indí-

Continúa en la página E2

## Los “falsos positivos” son crímenes de Estado

Bajo los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe, miembros de la Fuerza Pública han asesinado a cientos de civiles para presentarlos como individuos abatidos en combate, con el fin de mostrar éxitos militares y recibir beneficios. Esas ejecuciones, que son precedidas por desapariciones forzadas, son de carácter sistemático y deben ser tipificadas como crímenes de lesa humanidad. Resulta de extrema gravedad que quienes deben defender la vida de los ciudadanos y velar por su seguridad, sean quienes se encargan de violar los derechos humanos en forma generalizada, y que esas prácticas criminales sean auspiciadas por la política de Seguridad Democrática.

Los llamados “falsos positivos” no pueden ser considerados como delitos de individuos desviados, casos aislados o como meros síntomas de corrupción dentro de las fuerzas militares. Estos hechos se han presentado en múltiples departamentos del país, de manera permanente y con la participación de oficiales, suboficiales y soldados rasos del Ejército Nacional. La directiva No. 029 de noviembre 17 de 2005 del Ministerio de Defensa de Colombia ofrece estímulos a cada soldado que demuestre haber abatido a miembros de grupos armados al margen de la ley.

Legalizar las ejecuciones perpetradas por miembros de la Fuerza Pública es una vieja modalidad criminal en Colombia. En septiembre de 2008, los “falsos positivos” se dieron a conocer al país cuando 19 jóvenes del municipio de Soacha que habían sido desaparecidos, fueron encontrados en fosas comunes en el municipio de Ocaña y Norte de Santander. En años

Continúa en la página E3

COLOMBIA  
SOLIDARITY  
CAMPAIGN

# Editorial

## Colombia: Laboratorio de Embrujos

Con este poético y sugestivo título, el escritor e investigador colombiano Hernando Calvo Ospina, publicó su último libro el año pasado. Cualquiera que

Por Carlos Cruz

ignore el trabajo periodístico y literario de este colombiano exiliado en París desde hace ya mucho tiempo, pensaría que se trata de una obra poética, pues su solo título tiene la belleza y el sonido de la increíble metáfora de un pueblo.

Este libro, extenso y detallado trabajo histórico y periodístico, no deja lugar a dudas de un dedicado y social de Colombia desde los inicios de la república. Ignacio Ramonet, con su gran capacidad intelectual y sus conocimientos sobre la geopolítica en todo el continente americano, hace un interesante y acertado prólogo de este trabajo de Hernando Calvo Ospina, con lo cual lo acredita como una de las mejores obras que en materia de análisis socio-político se haya escrito en los últimos años sobre Colombia.

Colombia: laboratorio de embrujos es una radiografía cruda, inverosímil y alucinante del camino recorrido por Colombia al largo de su historia, desde su independencia del dominio español hasta nuestros días. Se

Continúa en la página E9

## BUEN VIAJE, MATEO

**Mateo Kramer** era vivió en Suiza parte de la comunidad okupa en Ginebra. Hace algunos años inició su recorrido por Latinoamérica, y se había quedado en Colombia desde hacía diez. Estudió en la Universidad Nacional, participó en el movimiento estudiantil, y se solidarizó con las y los campesinos del Cauca.

Se acercó a las comunidades campesinas del Cauca e inició su trabajo como profesor en la Vereda de San José y también como colaborador de los procesos de la comunidad de Inzá. Tuvo que salir por un par de años del país, por amenazas de muerte, pero luego regresó.

El 10 de diciembre de 2008, Mateo murió en Perú, en un accidente de tráfico, cuando viajaba "a dedo" hacia Argentina.

Muy conocido entre los medios de solidaridad latinoamericana, Matthieu Cramer, cooperante y actor de las luchas de los campesinos caucanos de Inzá-Colombia, murió el 10 de diciembre en un accidente de tránsito al norte de Perú, en un viaje de reencuentro con su hermano y organizaciones campesinas en Argentina.

Esta es una buena foto de Mateo. Retrata mucho de él: siempre lleno de energía, siempre al lado de quienes compartía sus causas, siempre en el lugar donde se daban las luchas.

El "mono" no estaría contento del todo en que

Continuación de la página E1

genas intentando de forma a la opinión pública en contra de las protestas en preparación del ataque que estaba a punto de producirse.

15 Oct: 90 indígenas son heridos en asaltos del ESMAD, la policía antimotines, que asesina de un tiro en la cabeza a Taurino Ramos, un hombre indígena de 23 años. La policía es filmada utilizando machetes y catapultas.

16 Oct: Un francotirador enmascarado se infiltra entre la policía y comienza a disparar a los indígenas. Este hecho es filmado y transmitido internacionalmente por la CNN.



17 Oct: El Uribe envía un

mensaje a la Minga

exigiendo que los indígenas se disculpen ante los soldados y policías heridos en la confrontación. El número de indígenas heridos alcanza las 150 personas.

21-25 Oct: La Minga levanta el bloqueo y marcha durante 70 km hasta Cali, donde se encuentra con los movimientos sociales.

26 Oct: Uribe evita un encuentro con los marchantes, que le han esperado durante horas.

29 Oct: ACIN informa que 29 indígenas han sido asesinados en todo el país durante el mes anterior.

2 Nov: Uribe finalmente acude al encuentro en La María de Piendamó, donde es interpelado por Aida Quilcue, pero evita adoptar ningún compromiso concreto. El periodista Holman Morris emite este evento en su programa Contravía.

3 Nov: la Minga delibera y decide continuar la movilización de masas con una nueva táctica: una marcha de 300 km para "Hacer Andar a la Palabra" hasta la capital nacional, Bogotá.

10 Nov: los marchistas dejan Cali acompañados de una colorida caravana de camionetas chiva. Se

se dedicaran unas líneas exclusivamente para él. Porque parte de su acción revolucionaria reclamaba el poder popular lejos de cualquier protagonismo individual.

Cada proyecto y cada idea que proponía se enmarcaba en el principio de lo comunitario, lo autónomo y lo rebelde: podía ser una casa ocupada en Ginebra; la olla comunitaria en la UN de Bogotá para reclamar el derecho básico de los estudiantes a la comida; la construcción del proyecto de vida

en grupos desde Antioquia, Nariño y La Guajira. Otros sectores populares se unen al río humano de resistencia.

12 Nov: la marcha llega a Ibagué donde planea encontrarse con población desplazada, pero la policía bloquea la ruta y les ataca con una carga a caballo. Un contingente de mujeres consigue romper las filas de la policía, lo que permite a la Minga continuar su camino.

19 Nov: el movimiento indígena se une al movimiento social urbano en una audiencia pública sobre Derechos Humanos que se celebra en Soacha, en las afueras empobrecidas del sur de Bogotá, donde cientos de jóvenes han sido "desaparecidos" por agentes del estado y los paramilitares.

20 Nov: la Minga llega al campus de la Universidad Nacional, pero se le deniega el uso de los edificios para dar alojamiento a los marchantes, que finalmente acampando al aire libre. En la Universidad del Cauca, los estudiantes de Popayán son amenazados por los paramilitares de las "Aguilas Negras" por apoyar la Minga.

21 Nov: se celebran actos de solidaridad en Berlín, Barcelona, París, Londres, Lima y varias ciudades a lo largo de América.

22 Nov: la Minga se transforma en una manifestación nacional que confluye sobre la principal plaza de la capital, la Plaza Bolívar, demandando Derechos Humanos, el Retorno a sus Territorios y la exigencia al Estado de que cumpla los compromisos acordados con los sectores sociales.

29 Nov: Aida Quilqué, consejera jefa del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, interviene en la manifestación: "La Minga ha construido una comunidad en Bogotá. Vinimos desde las montañas y los valles del Cauca, desde las cimas nevadas de Sierra Nevada de Santa Marta, desde las arenas de La Guajira, desde las junglas del Pacífico y la Amazonía, desde los picos y los volcanes de la cordillera andina. Paso a paso, el mundo rural animó nuestros corazones, unió las voces de nuestro pueblo y despertó de nuevo al sueño de un país para todos" (1). La manifestación decide una doble estrategia: trabajar desde la base con las comunidades, y dirigir sus demandas hacia Estados Unidos.

10 Dic: Aida Quilqué, del pueblo Nasa, y Ana Manuela Ochoa, de los Kankuamos, asisten al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU,

de comunidades campesinas del Cauca; la minga social y comunitaria emprendida por diversas comunidades indígenas el año pasado. La lista de procesos que Mateo apoyaba y animaba es interminable, porque confía plenamente en la fuerza de lucha de cada una y cada uno. Era una bella persona, hay que decirlo, soñadora y de sonrisa desprevenida.

en Ginebra, donde se está examinando el informe sobre Colombia. Ellas demandan que Colombia firme la Declaración de las Naciones Unidas de 2007 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 16 Dic: a las 4 de la madrugada, Edwin Legarda, el marido de Aida Quilqué, es asesinado en una emboscada del ejército. La noticia es recibida con indignación y rabia.

Los líderes indígenas y los medios de comunicación indígenas independientes han sido perseguidos durante todo el proceso. El 25 de noviembre las fuerzas del estado detuvieron a dos líderes de la comunidad de Cañamomo Lomapieta en Riosucio, la región cafetalera de Caldas. Esta es una zona donde las comunidades indígenas han estado recuperando sus tierras mediante ocupaciones, tierras que han utilizado para implementar sus planes alternativos de vida.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acín) ha estado en el centro de las movilizaciones. La página web de Acín ha sido bloqueada. El 14 de diciembre, su estación de radio Pa'yumat fue asaltada, los atacantes destruyeron los cables y robaron equipamiento. El equipo de comunicación de Acín ha recibido continuas amenazas de muerte.

A pesar de todos estos problemas, durante los días 21 y 22 de Febrero de 2009, se realizó un encuentro en el que participaron delegados de organizaciones de afrodescendientes, de estudiantes que reafirmaron su apoyo a La Minga de Resistencia Indígena y Popular. El encuentro acordó un plan de movilizaciones sectoriales a realizar durante 2009 que converja en una cumbre de organizaciones sociales en el último trimestre del año.

Como todas las experiencias anteriores, ésta será también atacada y algunos de los participantes pagarán con su vida por rebelarse contra el régimen. El pueblo continúa su resistencia plenamente consciente de ello. La Campaña de Solidaridad con Colombia hace un llamamiento para acompañar, apoyar y defender a La Minga.

Contactos para la Minga: emails comunicaciones@onic.org.co ; acincauca@yahoo.es ; info@cric-colombia.org

(1) informe de Mario Murillo en <http://upsidedownworld.org/main/content/view/1600/61/>



Tuvo la capacidad de tejer lazos y fortalecer las redes entre comunidades de diferentes rincones de Colombia y el mundo, como el mejor ejemplo de la internacionalización de la lucha y la solidaridad: "se puso la camiseta" y participó como un inzaño más. Su trabajo dejó clara la importancia de la presencia de "internacionales" en las comunidades que buscan alternativas a las relaciones políticas, económicas y humanas, en medio del conflicto. Pero una presencia comprometida, transparente y abierta a entender las lógicas de pensamiento y de acción de sus miembros.

\* muchas palabras y expresiones de este texto fueron "prestadas" de los mensajes de solidaridad de diferentes organizaciones y personas que trabajaron y caminaron con Mateo.

# Los "falsos positivos" son crímenes de Estado

Continuación de la página E1

recientes, la plataforma de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos denunció más de 1.400 de estos casos. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha comenzado investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales que involucran a 763 agentes de la Fuerza Pública y que reconocen la existencia de por lo menos 1.137 víctimas.

Aunque el presidente Uribe, una vez se enteró de la gravedad de los hechos, ordenó la destitución de 27 militares, entre ellos tres generales, esta medida no ha sido suficiente. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha declarado que estos crímenes son cosa del pasado. Sin embargo, los medios de comunicación siguen registrando a diario denuncias que demuestran la persistencia de estas ejecuciones.

El 6 de marzo de 2009, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado convocó a la jornada contra las ejecuciones extrajudiciales, cuyo evento central reunió a los familiares de las víctimas en todo el país. La jornada de conmemoración se extendió a otras ciudades del mundo, entre ellas Londres, París y Madrid.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

## EEUU conocía desde 1990

Documentos desclasificados del Departamento de Estado de EEUU y filtrados a la organización civil National Security Archive (NSA), un grupo de investigación ligado a la Universidad de Georgetown, revelan que la CIA conocía desde 1990 estas prácticas delictivas perpetradas por las fuerzas de seguridad de Colombia. El presidente era entonces el liberal Virgilio Barco.

En uno de los archivos, la CIA vincula al general Mario Montoya, el "héroe" que liberó a Ingrid Betancourt y que fue forzado a dimitir el 4 de noviembre para frenar el acoso a Uribe, en operaciones conjuntas con paramilitares de extrema derecha en Medellín.

Quien ocupaba el cargo de embajador estadounidense en Colombia en 1994, Myles Frechette, califica a Montoya de promotor del método del "body count", nombre utilizado para certificar éxitos en la guerra contrainsurgente y permitir ascensos en la carrera militar. La organización Colombia NUNCA MÁS que intenta rescatar la memoria histórica de aquel país, ha creado un banco de datos con 25.000 ejecuciones extrajudiciales hasta 1998, de los que 10.000 cuerpos nunca han aparecido.

Publico.es MADRID 14/01/2009

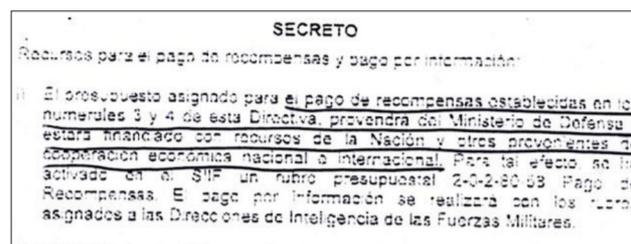
## Han sido asesinados 27 indígenas Awás

Según declaraciones hechas por indígenas de la Comunidad Awá, asentada en Nariño, cerca a la frontera con Ecuador, el 4 de febrero varios hombres armados con distintivos de las FARC, detuvieron 20 hombres, mujeres y niños de su comunidad. Ellos fueron llevados contra su voluntad a la quebrada El Hojal, cerca a la población de El Bravo, donde algunos fueron asesinados. El día siguiente tuvieron lugar enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército nacional; seguido en la tarde por los bombardeos de las Fuerzas armadas en el área, causando terror entre los pobladores y su desplazamiento masivo.

La Organización Nacional de Indígenas de Colombia ONIC señaló a las FARC como responsable del asesinato de 27 indígenas Awá a principios del mes de febrero. Posteriormente las FARC admitieron haber asesinado 8 indígenas Awá, acusándolos de ser informantes del ejército; explicación que ha sido fuertemente rechazada por el movimiento indígena y las organizaciones de derechos humanos.

El 23 de febrero, las comunidades indígenas dieron inicio a la Minga Humanitaria por la Dignidad del Pueblo Awá con el propósito de rescatar los cuerpos de sus compañeros asesinados. A la vez, responsabilizaron al gobierno colombiano por insistir en involucrar a la sociedad civil en el conflicto, y por su negligencia al prevenir el desplazamiento forzado y otras violaciones de derechos humanos por parte de los grupos armados tanto ilegales como la fuerza pública.

## Documento Secreto revelado



Extracto del documento en el que se especifica la financiación de las recompensas

Este protocolo no sólo pone en duda la legalidad de la política de Seguridad Democrática que le ha ganado popularidad a Uribe.

## El Bloque Intelectual

Se demoró casi seis años el señor presidente para lanzar una descalificación aún peor que la de septiembre de 2003 contra los defensores de derechos humanos («escritores, politiqueros y defensores del terrorismo»).

El contexto en esta ocasión fue la crisis que el propio gobierno desató con los sobrevuelos militares durante la liberación unilateral por parte de las FARC de tres policías y un soldado el pasado domingo.

Los sofismas de distracción fueron la presencia de Hollman Morris en el lugar y el reporte de Jorge Enrique Botero a Telesur. El detonante final fueron las declaraciones del periodista Daniel Samper que confirmaban... el intento de sabotaje gubernamental a las liberaciones.

El señor presidente acusó sin dar nombres, señaló con generalizaciones y estigmatizó nuevamente a ese 10 por ciento de ciudadanos y ciudadanas que según las encuestas no está de acuerdo con la «política de seguridad democrática» ni con la

## Audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la situación sindical colombiana

En los últimos 23 años se registraron en Colombia 9.911 hechos de violencia, que incluyen 2.694 sindicalistas asesinados (482 en lo que va del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez). Lo que le da a nuestro país un triste récord mundial: el 60% de los homicidios de sindicalistas en el planeta, ocurren en un solo país: Colombia, considerando incluso a países donde existen férreas dictaduras. En el 2008 hubo 49 asesinatos, 10 más que los registrados en el 2007 – según un informe presentado por la Escuela Nacional Sindical (ENS) en Washington a la audiencia especial del Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

ENS se refirió también al tema de la impunidad: de los 2.694 homicidios apenas 1.104 han sido investigados, o sea que el 60% no lo ha sido. Y apenas en 90 casos ha habido sentencia condenatoria, pero sólo de autores materiales, no de los intelectuales.

En cuanto al tema de las libertades sindicales, ENS señaló que el Gobierno colombiano no cumple con los estándares de la OIT: de los 18 millones de trabajadores que hay en Colombia, menos de 3

## Las FARC liberan a cinco rehenes

El político Alan Jara, antiguo gobernador de Meta, fue liberado por la guerrilla de las FARC el pasado 3 de febrero. Jara había sido secuestrado por las FARC en el año 2001 y ha pasado más de siete años en la selva. Un día antes, las FARC habían liberado unilateralmente a tres oficiales de policía y a un soldado gracias a la mediación de la Cruz Roja Internacional.

Jara ha acusado al presidente Alvaro Uribe de "no haber hecho nada" por liberar a los rehenes; por el contrario, Jara agradeció a la senadora Piedad Córdoba y al presidente venezolano Hugo Chávez sus esfuerzos mediadores.

La liberación de Jara ha supuesto un evidente contraste respecto al espectáculo mediático organizado en torno a la liberación de

También compromete los acuerdos de cooperación internacional suscritos con varios países...

El documento, de 15 páginas, contradice a Uribe, quien siempre negó que existiera una política sistemática de recompensas. Pero la orden entró en vigor de forma "permanente" el 17 de noviembre de 2005. Según las tablas de valoración, el Gobierno paga por un cabecilla 1,7 millones de euros y por un guerrillero raso, 1.300 euros.

Con esta oferta pública, los soldados se lanzaron a la caza del indocumentado. El miedo hizo el resto. Nadie fue capaz de denunciar estas atrocidades hasta que a alguien del Ejército se le ablandó el corazón.

Publico.es MADRID - 04/12/2008

«confianza inversionista», ni con el hecho cierto y comprobado de los estrechos vínculos de una gran porción del uribismo con el proyecto paramilitar.

Nos llamó «bloque intelectual de las FARC» y advirtió que no nos atrevemos a descalificar al gobierno ni a apoyar a la guerrilla abiertamente como parte de la estrategia...

Con su discurso, Uribe no sólo ha legitimado una vez más el uso de la violencia clara para quienes se le oponen, sino que ha dado instrucciones claras para poner en marcha persecuciones judiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y hasta uno que otro insulto en los diferentes aeropuertos del país, como ya le sucede a Piedad Córdoba. O más amenazas, como las 50 que ha recibido Hollman Morris desde el pasado domingo.

En la Casa de Nariño...hay quienes ruegan para que ninguna posibilidad de paz prospere en Colombia, pues la guerra es la única opción para un tercer período presidencial...

Tomado de: [www.radionizkor.org/colombia](http://www.radionizkor.org/colombia)

millones tienen contrato laboral con empresas, y por tanto -la ley lo estipula así- son los únicos que pueden afiliarse a sindicatos. Y de estos, menos de un millón están efectivamente afiliados. Pero además están las trabas para formar sindicatos: en 2007 el Ministerio de Protección Social negó el registro a 253 sindicatos.

Y por último se refirió a las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), que de hecho han introducido un nuevo modelo de relación laboral, que ignora las recomendaciones que con respecto a este tipo de cooperativismo ha hecho la OIT; un modelo basado en empleos precarios y de bajo costo, y sin derechos laborales ni sindicales, lo cual constituye una situación insostenible. Son seudocooperativas que los empresarios, y el mismo Estado, están utilizando para precarizar el empleo en Colombia y evitar la consolidación de los sindicatos.

El comité tiene 40 días para agregar más información al expediente sobre la situación laboral y sindical en Colombia, el cual será entregado al Congreso de Estados Unidos en el contexto de las deliberaciones en torno a la aprobación del TLC con nuestro país.

Rebanadas de Realidad - ENS, Medellín, 12/02/09

Ingrid Betancourt el pasado julio de 2008. Su liberación se ha visto retrasada debido a que el ejército ha estado amenazando el área donde la guerrilla iba realizar la liberación. Jara destacó la necesidad de continuar la presión popular para exigir un acuerdo humanitario entre el gobierno y las FARC. Su crítica a Uribe fue incisiva: "parece como si mantener el país en guerra le conviniera al Presidente Uribe", dijo, para añadir a continuación: "creo que las FARC han realizado un gesto, y que este gesto debe ser correspondido".

Sigfrido López, un consejero de Valle que había sido secuestrado por las FARC en 2002, fue liberado dos días después. Éste alabó los esfuerzos de la senadora Piedad Córdoba al tiempo que recordaba a sus antiguos captores que "en la historia de la humanidad, ninguna revolución ha triunfado sin apoyo popular".

# Colombia

## LA GUERRA EN LAS AULAS DE COLOMBIA:

### Violencia Política Contra Educadores en Colombia

En los últimos años ha crecido la conciencia en el Reino Unido sobre el número de violaciones a los derechos humanos en Colombia, y particularmente, contra sindicalistas colombianos (Amnistía 2007). Entre 1999 y 2005, de los 1147 sindicalistas asesinados reportados en todo el mundo,

Mario Novelli, Universidad de Amsterdam

816 eran colombianos (ENS, 2007). Sin embargo, aún es poco conocido que más de la mitad de éstos –416– eran trabajadores del sector educativo (véase Figura 1).

Aunque estas cifras son realmente alarmantes, sólo constituyen una representación parcial de la naturaleza y la escala de violencia, las amenazas de muerte, las desapariciones forzadas y los desplazamientos que la comunidad educativa en Colombia continúa soportando diariamente. Entre 1991 y 2006, 808 educadoras y educadores fueron asesinados, 2.015 recibieron amenazas de muerte, 21 fueron torturados, 59 fueron “desaparecidos”, 1.008 fueron forzados a abandonar sus hogares y puestos de trabajo por miedo a la violencia y 161 fueron detenidos arbitrariamente.

Para continuar este artículo, intentaré explicar cómo y porqué los educadores y el sistema de educación en general han sido involucrados en el conflicto colombiano actual y sugeriré las razones por las que algunas áreas del país han sido más afectadas que otras.

#### ¿Cómo el conflicto armado afecta la educación?

El sistema de educación en Colombia ha sido afectado de manera directa e indirecta, por el actual conflicto armado.

Primero, siendo una porción significativa del gasto público, el presupuesto para el sector educativo se encuentra en constante amenaza, debido al recorte de costos estatales, para privilegiar el financiamiento del conflicto armado. Aunque el recorte presupuestal y la reestructuración neoliberal en el sector educativo han sido efectuados en todo el mundo, cuando éstos tienen lugar en una zona de conflicto, pueden originar consecuencias particulares, como es el caso de Colombia.

Cuando los y las docentes y los y las estudiantes desafían o se resisten a las medidas de descentralización, austeridad fiscal y privatización (al igual que otros y otras han hecho en diferentes lugares del mundo), existe una tendencia a que la protesta sea vista como polarizada y a que los líderes y activistas de la misma sean señalados, tanto por el Estado como por las fuerzas paramilitares, como “subversivos”. En este sentido, durante periodos de reestructuración neoliberal, los principales sindicatos de educadoras y educadores se convierten en blanco de los ataques, con alta probabilidad de sufrir violaciones de derechos humanos.

En segundo lugar, muchas de las escuelas –especialmente en áreas rurales– se ven involucradas directamente en el conflicto. La Comisión Colombiana de Juristas afirma que entre 1996 y 2003, 71 escuelas sufrieron ataques por parte de la guerrilla, paramilitares y agentes estatales, a menudo debido a combates entre los diferentes grupos (2004:68). En las entrevistas realizadas para este informe, varios docentes mencionaron cómo a menudo el Ejército y la Policía instalan sus campamentos cerca de las escuelas –sobre todo en áreas rurales–, en una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. De

modo parecido, las escuelas son usadas con frecuencia por los diferentes grupos armados como lugar para pernoctar y para sostener reuniones ideológicas.

En tercer lugar, los y las estudiantes están siendo reclutados forzadamente tanto por grupos paramilitares como por la guerrilla. Human Rights Watch estima que hay más de 11.000 niños soldados en Colombia (2003). El Ejército colombiano también ha usado las escuelas como lugares potenciales para reclutar soldados como informantes. En Arauca, por ejemplo, el Ejército colombiano desarrolla una campaña llamada “Soldado por un día”, en la que lleva a niñas y niños a los batallones del Ejército, en donde les permiten disfrazarse y maquillarse de camuflado, conocer los helicópteros y montar en carros blindados (CCJ, 2004:64).

En cuarto lugar, en algunas áreas los equipos de docentes han sido presionados por las organizaciones paramilitares locales para decidir los contenidos de sus clases (Cameron, 2001).

Por último, los sucesos mencionados anteriormente tienen un grave efecto psicológico tanto en los y las estudiantes como en los y las docentes. La CCJ estima que desde 1991, más de mil profesores y profesoras han abandonado su profesión permanentemente por miedo a la violencia (2004).

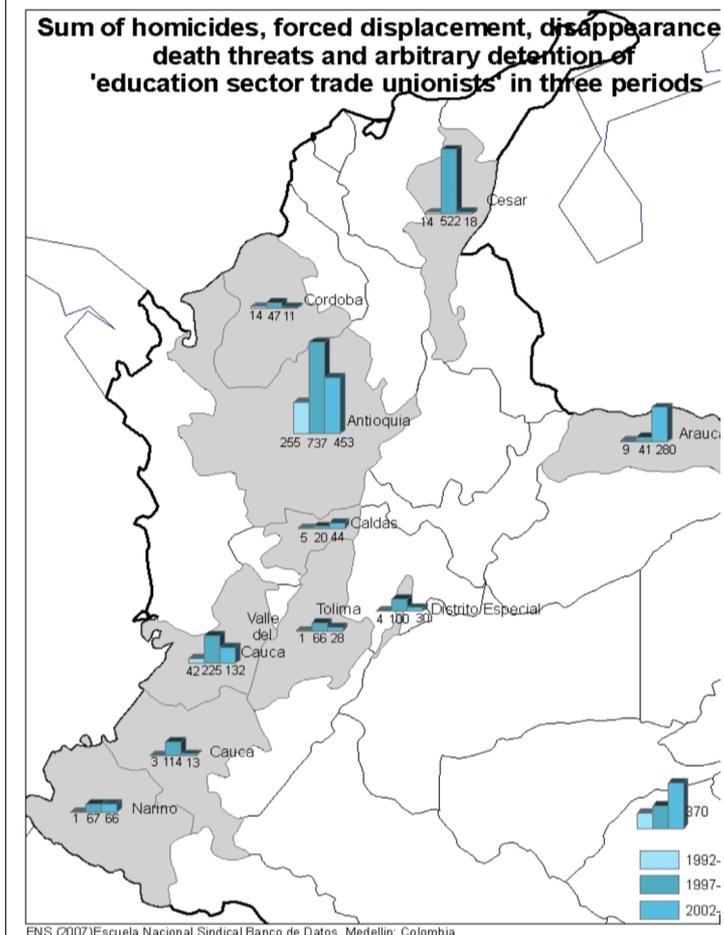
#### ¿Porqué los sindicatos de educadores son blanco en Colombia?

La evidencia sugiere que la gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos contra los sindicalistas fueron cometidas por los militares y por las organizaciones paramilitares de derecha con fuertes nexos a secciones del estado colombiano (Human Rights Watch, 1996; 2000; 2001).

Esto permitiría pensar que el movimiento sindical es perseguido por su postura de rechazo a las políticas gubernamentales y a sus lazos con movimientos de oposición. Si este es el caso, y los sindicalistas son vistos como un factor para inquietarse, entonces lógicamente habrá un claro señalamiento a la profesión de la enseñanza.

Debido a la represión y al crecimiento masivo del sector informal, la afiliación sindical en Colombia es muy baja, con

aproximadamente—. El sindicato más grande en el país es FECODE, la Federación Nacional de Educadores, con más de



**Figura 2** (Suma de homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones, amenazas de muerte y detención arbitraria de 'sindicalistas del sector educativo' en tres periodos).

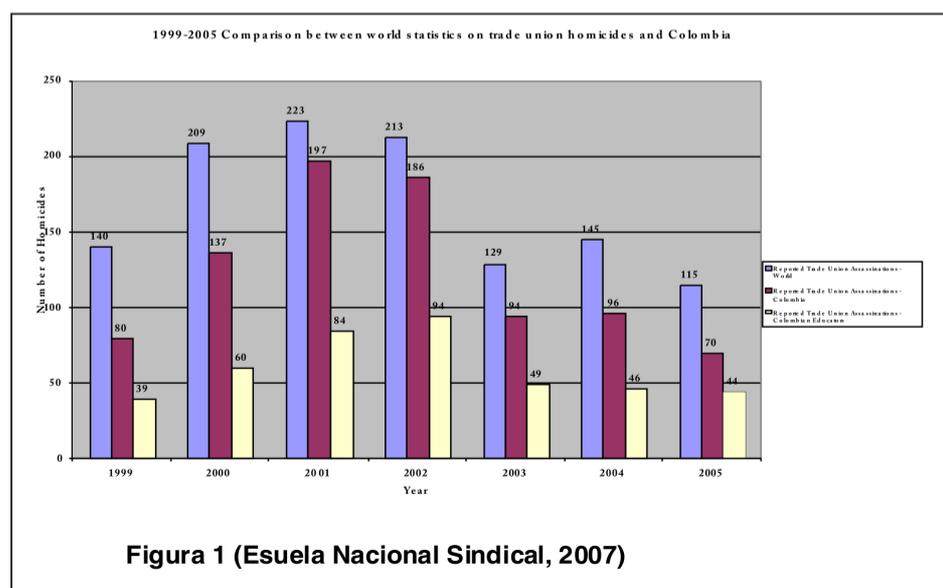
250.000 miembros (el sector privado de la educación está casi por completo sin sindicalizar, pese a que cubre a más del 50% de los estudiantes de secundaria y a casi el 70% de los universitarios).

FECODE tiene una gran influencia en la CUT (la mayor federación de trabajadores y trabajadoras colombianas) con muchas y muchos de sus exafiliados en su junta directiva. Asimismo, FECODE es un sindicato altamente disciplinado y bien organizado con afiliados y afiliadas en cada una de las ciudades colombianas y con capacidad de movilizarse nacionalmente como ningún otro sindicato en el país. Desde los años 90 hasta la actualidad se ha movilizó con cierto éxito, para oponerse a las reformas educativas ligadas a las medidas de austeridad neoliberal, a la descentralización y a la privatización de las instituciones.

Desde entonces FECODE se ha movilizó en diferentes ocasiones: en 2001, en contra de los cambios de mecanismos para la financiación de la educación (Ley 2001), lo cual desencadenó una huelga de seis semanas; más recientemente, en el 2007, como protesta a las asignaciones del presupuesto nacional del gobierno. En ambos casos, aunque no consiguió bloquear completamente los planes del gobierno, sí consiguió modificar la legislación a través de una negociación.

En el 2004, los educadores también se movilizó a nivel nacional por un “Vota No” al referendo que convocó el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con el fin de modificar la constitución para que ésta le permitiera ser reelegido. El referendo fue derrotado por la oposición y a FECODE se le adjudicó un papel protagónico en la victoria.

Del mismo modo, FECODE ha hecho público su apoyo al nuevo partido político de oposición, el Polo Democrático Alternativo, conformado en 2001 y caracterizado por ser un feroz crítico del



**Figura 1** (Esuela Nacional Sindical, 2007)

apenas el 5% de la fuerza de trabajo sindicalizada; la mayoría de los sindicalizados son empleados estatales –unos 800.000

## Colombia

actual gobierno y de la naturaleza del reciente “proceso de paz” con los paramilitares. Dicho proceso es interpretado como una forma de otorgarle inmunidad a personas involucradas en crímenes de lesa humanidad.

Todos estos factores han contribuido a que FECODE sea objetivo de la violencia política.

### ¿En qué lugares de Colombia son violados los derechos humanos de los educadores?

Aunque tal violencia política contra los y las educadoras en Colombia es generalizada y tiene una larga historia, no está uniformemente distribuida. En la figura 2 podemos observar las cifras de cinco violaciones graves de derechos humanos (homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, amenaza de muerte y detención arbitraria), distribuidas en tres periodos de tiempo (1992-1997; 1997-2002; 2002-2007). Es alarmante que el departamento de Antioquia sobresalga en los tres periodos. Llama la atención, porque a mediados de los años noventa Antioquia, según muchas de las personas entrevistadas, fue usada como laboratorio de pruebas para el nuevo proyecto paramilitar, el cual, a posteriori, se implementó en otros departamentos (O’Loingsigh, 2004; 2007).

Durante este periodo, el paramilitarismo en Colombia parece transitar de las milicias privadas regionales de los terratenientes inquietos por los ataques de la guerrilla, a una estructura nacional estrechamente ligada a las fuerzas armadas. Si damos una mirada a las estadísticas de las violaciones de derechos humanos contra los educadores desde 1997 en

adelante, en Antioquia, podemos ver claramente el brusco incremento de asesinatos, desplazamientos y amenazas de muerte que coinciden con este cambio.

Fuera de Antioquia, para dar una explicación de los patrones geográficos de las violaciones de derechos humanos a los educadores, es central comprender la propagación y la trayectoria del paramilitarismo en la década de los noventa y la consecuente ejecución del Plan Colombia, el paquete de enorme ayuda militar norteamericana que comenzó en 1998 (Duncan, 2006, Romero, 2007).

Como podemos observar en la figura 2, durante el segundo periodo (1997-2002) hubo un gran aumento de violaciones a los derechos humanos de educadoras y educadores, tanto en Valle del Cauca y Cauca, como en Cesar. Las tres, fueron regiones donde las organizaciones paramilitares emergieron a finales de los años noventa, y fueron territorios clave para las operaciones del Plan Colombia. Asimismo, en el tercer periodo

(2002-2007) vemos un importante aumento en el número de violaciones a derechos humanos en Arauca, desde cuando el presidente Uribe, con su nuevo plan de Seguridad Democrática, designó este departamento como “Zona de Rehabilitación y Consolidación”.

### Conclusión

A pesar de los ataques generalizados contra los educadores y el sindicalismo del sector educativo, la oposición al gobierno de Uribe continúa tanto en colegios y escuelas, como en universidades.

Como miembros de la comunidad educativa internacional y del movimiento sindical internacional es importante

para nosotros y nosotras construir solidaridad con nuestros colegas colombianos y colombianas. De esta manera, contribuimos a fortalecer sus intentos de hacer más visible la horrible situación en materia de derechos humanos que está viviendo su país y a acompañarlos tanto con el apoyo político como financiero que necesitan para defender sus derechos humanos. A la vez, podemos presionar nuestros propios gobiernos, para que detengan el apoyo al estado colombiano, mientras no respeten ni protejan los derechos de sus ciudadanos. Si somos capaces de hacer todo

esto de manera sistemática, podemos tener un papel en la lucha por los derechos humanos en Colombia, tanto en su sistema educativo, como más allá de éste.

### Referencias

- Amnesty International (2007) Colombia Killings, arbitrary detentions, and death threats - the reality of trade unionism in Colombia. London: AI.
- Cameron, S. (2001) Out of War: True Stories from the Front Lines of the Children’s Movement for Peace in Colombia. New York: Scholastic Press.
- Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) (2004). El disfrute del derecho a la educación en Colombia. Bogotá: CCJ.
- Duncan, G (2006) Los Señores de la Guerra. Bogotá: Planeta.
- Human Rights Watch (HRW) (2001) The “Sixth Division” Military-paramilitary Ties and U.S. Policy in Colombia. New York: Human Rights Watch.
- Human Rights Watch (HRW) (1996) Colombia’s Killer Networks: the Military-Paramilitary Partnership and the United States. New York: Human Rights Watch.
- Human Rights Watch (2003) “You’ll Learn Not To Cry”: Child Combatants in Colombia. HRW: New York
- Human Rights Watch. Human Rights Watch (HRW) (2000) Colombia The Ties That Bind: Colombia And Military-Paramilitary Links, 12, (1). New York: Human Rights Watch.
- O’Loingsigh, G. (2003) The Integral Strategy of the Paramilitaries in Colombia’s Magdalena Medio.
- Romero, M (2007) Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Corporación Nuevo Arco Iris: Bogotá.

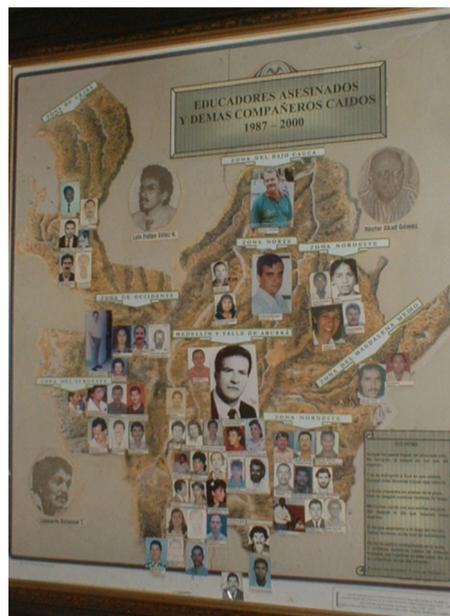


Imagen de educadores y defensores de los derechos humanos muertos en Antioquia entre 1987-2000 que cuelga en la matriz de ADIDA, el sindicato de maestros en Antioquia Medellín. Ningún sindicato ha sufrido más de represión y violencia política que ADIDA en las últimas décadas.

## LA ELIMINACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: UNA POLÍTICA DE ESTADO

La eliminación del pensamiento crítico se ha convertido en una política de Estado para perpetuar el orden establecido. Son muchas las voces que a lo largo de la historia

Extractos de comunicado de los estudiantes Universidad de Caldas y

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, a propósito de la injusta detención de un docente de la institución universitaria.

nacional se han pronunciado frente a las arbitrariedades del sistema económico, político y social en el que no parece haber lugar para la disidencia. La posibilidad de reinventarse el mito, de reconstruir la historia y de habitar el mundo desde formas diversas parece conminarse al terreno de lo impensable, de lo innombrable, de lo indecible.

(...) Es por eso que como estudiantes de la Universidad de Caldas queremos manifestar nuestro rechazo vehemente a la persecución sistemática de la que vienen siendo víctimas estudiantes y docentes de las Universidades públicas del país. Sabemos que nuestros relatos frente a esto son manifestaciones concretas de una problemática nacional, de una política del gobierno en la que toda sospecha, toda negación, toda contradicción es culpable per

se: aún contra toda presunción de inocencia y empleando todos los mecanismos jurídicos, políticos y mediáticos a su disposición para demostrarlo.

Prueba de ello son los reiterados llamados del presidente Uribe a la fuerza pública para que ingrese sin la menor justificación a las universidades públicas, al igual que a los “fiscales de la patria” para que judicialicen estudiantes y profesores universitarios. Sin duda la muestra más fehaciente del autoritarismo y de la persecución que ha emprendido el gobierno en contra del pensamiento y la reflexión, es el caso del nuevo fiscal especializado de la unidad contra el terrorismo, Jorge Iván Piedra hita Montoya. El fiscal ordena revisar las bases de datos de las universidades del país en busca de historias de vida que puedan ser relacionadas con la militancia guerrillera. Orden que, por supuesto, fue rechazada tanto por algunos de sus colegas en la rama judicial como por los rectores de las universidades quienes, con indignación, calificaron la medida como desproporcionada y persecutoria.

En medio de esta lógica de reclusión a los académicos destacados que se piensan la Universidad más allá de la contemplación y de la reproducción mecánica de las teorías, que asumen la producción y difusión de

conocimiento como una apuesta vital, es detenido el profesor de filosofía Jaime Alberto Pineda.

El jueves 13 de noviembre el docente Jaime Pineda fue detenido por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) cerca a la instalaciones de la Universidad de Caldas. Al día siguiente fue trasladado a la ciudad de Bogotá.

A nuestro profesor se le acusa de “rebelión”, delito por el que ya había sido procesado en la ciudad de Manizales en el año 2007 y del que no fue declarado culpable por ausencia de un acervo probatorio suficiente.

En el proceso por el cual fue nuevamente detenido se le imputan los mismos cargos, lo cual constituye una vulneración flagrante al debido proceso. La Constitución Nacional estipula que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Sin embargo, el día 19 de noviembre el juez negó la apelación del abogado defensor al habeas corpus, mecanismo de garantía procesal y de protección de la libertad personal.

Confiamos en el criterio del juez para reconocer las inconsistencias en el debido proceso y para otorgarle la libertad a nuestro docente lo más

pronto posible. Su ausencia se siente en los lugares por los que transitamos cotidianamente, su voz convierte nuestras aulas de clase en espacios para potencializar la vida, no para ahogar la diferencia. En él encontramos una propuesta coherente de Universidad en la que sus textos, su discurso, sus apuestas estéticas se orientan a la consolidación de un proyecto de universidad fundamentado en la investigación como escenario para deconstruir y reconstruir la academia y la sociedad, un espacio que forma parte de su ser y al que le ha aportado de forma disciplinada e invaluable.

Así mismo nos oponemos a las publicaciones y pronunciamientos por parte de algunos medios de comunicación que de manera irresponsable asumen la culpabilidad de Jaime Pineda sobre hechos que no se le han demostrado, lo cual atenta contra su integridad y su presunción de inocencia.

Esperamos que cada vez sean más voces, más manos, más pieles, más cuerpos, más sensibilidades apoyando a Jaime Pineda y a todos aquellos que han sido víctimas de la persecución del Estado. En espera del pronto regreso de nuestro docente y de todos aquellos que aún creen que la reinención del mito no es sólo posible sino necesaria.

# El Salvador

## CENTROAMÉRICA: DE LOS ACUERDOS DE PAZ A LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO.

### ¿Supondrán las próximas elecciones en El Salvador un cambio de tendencia?

Antonio Urbina

Dentro de pocos meses, en El Salvador se van a celebrar elecciones presidenciales. La primera vuelta es el 15 de marzo, si ningún candidato gana con más del 50% de los votos, lo que parece poco probable, habrá una segunda vuelta el 19 de abril. Antes, el 18 de enero,

ya se han celebrado elecciones legislativas y municipales, que han sido ganadas por el FMLN por un estrecho margen. Ahora, las elecciones presidenciales pueden representar un cambio histórico de tendencia, no sólo para El Salvador, sino para toda Centroamérica.

La década de los ochenta en toda Centroamérica supuso una época de guerra de baja intensidad en la que el gobierno de los Estados Unidos se empeñó en destruir la revolución sandinista encabezada por el FSLN y a la vez derrotar a los frentes guerrilleros de Guatemala (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG) y El Salvador (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN). El coste humano de los años de guerra es enorme, casi medio millón de muertos entre los tres países, decenas de miles de desaparecidos, millones de refugiados y desplazados. La infraestructura y buena parte del tejido económico queda destruido. Tras diez años de guerra era evidente que ninguna de las partes podía obtener una victoria militar y se impone entonces una política realista encaminada a alcanzar Acuerdos de Paz.

Estos distintos procesos conforman un modelo común de "proceso de paz" que en última instancia no ha permitido modificar los mecanismos más sutiles de dominación. El resultado final ha permitido la imposición de unos acuerdos de libre comercio a gobiernos democráticamente elegidos, pero dependientes y dóciles hacia el gobierno de los Estados Unidos. La desmovilización de los actores armados fue el primer paso en un largo proceso que vio la implicación de Naciones Unidas y especialmente del "grupo de Contadora", formado por naciones consideradas "amigas del proceso de paz" (Panamá, Colombia, Venezuela y México). Varios acuerdos parciales fueron aprobándose a lo largo de varios años, lo que permitió primero humanizar los conflictos y finalmente alcanzar un acuerdo global de paz que permitió iniciar un proceso de democratización.

El ritmo y el alcance de dichos acuerdos varia de un país a otro. En Nicaragua, los sandinistas son derrotados electoralmente por una coalición opositora encabezada por Violeta Chamorro (25 de febrero de 1990), y solamente entonces La Contra, entrenada y armada por EEUU, inicia su proceso de desmovilización. En El Salvador y en Guatemala, tras largos procesos negociadores y varios acuerdos parciales, se firman sendos Acuerdo de Paz, el 16 de enero de 1992 y el 29 de diciembre de 1996 respectivamente, que permiten a los frentes guerrilleros legalizarse como partidos políticos y participar en elecciones. En estos procesos electorales, el FSLN y el FMLN se mantienen como importantes referentes de la izquierda, con una cuota en torno al 30% del poder legislativo, y mayoritarios en el poder municipal, tanto en poblaciones rurales como en la propia capital, y con opciones reales de ganar una elección presidencial.

En todos los países, la parte de los Acuerdos de Paz que se ha quedado sin cumplir es siempre aquella relacionada con reformas más o menos estructurales encaminadas a reducir la gran injusticia social y económica inherente en el sistema de explotación de estos países. La década de los noventa ha visto una profundización en las políticas neoliberales, con la reducción de los servicios sociales y la privatización de los pocos recursos que quedaban en manos del estado.

En El Salvador, en 2001, se suprime la moneda nacional, el "Colón", y se sustituye directamente por el dólar norteamericano. La monetarización de la economía, la proliferación de la maquila, donde no se toleran las organizaciones sindicales, la explotación desmedida de las materias primas sin ninguna consideración medioambiental y usurpando a los pobladores sus tierras para minería, camaroneras, o cultivos agroindustriales. Y lo que es muy significativo, la consolidación de todas estas políticas mediante la negociación por parte de los diferentes gobiernos de turno de un nuevo acuerdo comercial multilateral entre los países centroamericanos y Estados Unidos. Dicho acuerdo es el DR-CAFTA, "Acuerdo de Libre Comercio para Centroamérica y la República Dominicana", que se empieza a negociar a comienzos de 2002 por la "vía rápida", se firma a lo largo de 2004 por los distintos gobiernos, y tras un proceso de ratificación en los respectivos parlamentos, donde apenas hubo debate, entra plenamente en vigor hace apenas un año entre grandes protestas de los sectores populares. Solamente en Costa Rica se ha celebrado



un referéndum, que fue ganado por el gobierno por un estrecho margen (51% Sí, frente a un 48% No) gracias a la intervención y las amenazas norteamericanas durante la campaña.

Los últimos resultados electorales en Centroamérica han deparado importantes cambios: el FSLN tiene ahora la mayoría (relativa) en la cámara legislativa y el presidente de Nicaragua es de nuevo Daniel Ortega; en Guatemala, Alvaro Colóm, quien en 1999 ya fue candidato presidencial de ANN "Alianza Nueva Nación", coalición de izquierdas promovida por la URNG, antigua guerrilla que se había legalizado como partido político tras los Acuerdos de Paz, es ahora el presidente electo desde 2007 tras la victoria que obtuvo al frente de la UNE ("Unidad Nacional de la Esperanza" coalición de tendencia socialdemócrata). Panamá se ha negado a firmar el CAFTA. Y en El Salvador, la posible victoria del FMLN en marzo/abril de este año podría suponer un vuelco regional en la correlación de fuerzas.

Sin embargo, estos avances no están suponiendo, al menos de momento, cambios en las políticas económicas. No se cuestiona la estructura heredada y no se cuenta con un movimiento popular organizado que pueda empujar y obligar a acometer los cambios necesarios. Por ejemplo, en Guatemala, el actual presidente se opuso al CAFTA durante la campaña electoral, pero ahora, desde el gobierno, busca la forma "de sacarle el máximo provecho". En Nicaragua, el FSLN participó en las movilizaciones contra el CAFTA, pero una vez en campaña electoral, Daniel Ortega dejó de hablar del acuerdo y al alcanzar la presidencia le dio su apoyo, aunque ahora ha exigido un "fondo de compensación" para contrarrestar los efectos perniciosos que ya se ha visto que está produciendo en la economía nicaragüense. Solo más recientemente, en los presupuestos de 2008 se han abordado

mejoras en las políticas sociales en Nicaragua, con un fuerte incremento en el gasto educativo y en salud que ha sido duramente criticado por aumentar el déficit público. En paralelo, Daniel Ortega ha anunciado que podría unirse al ALBA (Alianza Bolivariana de las Américas) promovida por Hugo Chávez, pero es difícil imaginar cómo la adhesión al ALBA podría hacerse compatible con el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.

Desde antes de la firma de los acuerdos de paz, El Salvador ha sido gobernado por ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, partido de extrema derecha que fue fundado por Roberto D'Abuison, autor intelectual del asesinato en 1980 de Monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, y creador de los escuadrones de la muerte salvadoreños, autores de numerosas matanzas durante los años de la guerra.

Una victoria electoral del FMLN en El Salvador supondría un hecho histórico para este pequeño país, y tendría consecuencias importantes para toda la región. La intervención norteamericana en las anteriores elecciones financiando al gobierno de ARENA y creando una campaña de miedo ante la victoria de los "comunistas" ha sido denunciada en diversos foros, sobre todo la campaña de 2004, donde todas las encuestas indicaban una victoria del FMLN, y EEUU llegó a amenazar con la prohibición de los envíos de remesas de los emigrantes a sus familias (que suponen un 17% del PIB con más de 3000 millones de dólares anuales), o el cierre masivo de las maquilas que emplean a buena parte de los trabajadores asalariados del país. El FMLN, que se opuso firmemente a la ratificación del CAFTA, que ha participado en las movilizaciones contra las políticas neoliberales del gobierno de ARENA, y que ha denunciado en 2005 ante la Corte Suprema de Justicia salvadoreña la ratificación del tratado, podría ganar las próximas elecciones ya que las últimas encuestas le dan una ventaja de 17 puntos frente a ARENA. "Cambio en El Salvador para vivir mejor", el programa de gobierno del FMLN, habla del fracaso de las políticas neoliberales, se centra sobre todo en la democratización real del país y promete implementar políticas encaminadas a la reducción de la pobreza. Sin embargo, la única mención directa al comercio con Estados Unidos se encuentra en el siguiente párrafo: "Fortalecer el intercambio comercial con Estados Unidos y, en el marco de la integración regional, con el resto de Centroamérica", no hay ninguna mención explícita al CAFTA.

La victoria del FMLN en las recientes elecciones parlamentarias y municipales del pasado 18 de enero ha sido menor de la esperada por las encuestas. Los resultados han dado al FMLN el 49.5% de los votos, lo que le supone ganar 37 escaños de un total de 84; ARENA consiguió 32 escaños con el 40.1% de los votos y otros tres pequeños partidos ganaron 15 escaños entre todos ellos. Al no haber conseguido la mayoría absoluta en el parlamento, estará obligado a conseguir alianzas con los otros grupos minoritarios, todos de derechas, lo que hará difícil poder denunciar el CAFTA. Además, el FMLN ha perdido frente a ARENA la alcaldía de la capital, San Salvador, en la que gobernaba desde hace doce años. Es un aviso de que las cosas están difíciles y la campaña presidencial va a ser muy dura y ajustada.

Una victoria electoral del FMLN en las elecciones presidenciales de El Salvador, le supondría convertirse en el primer grupo guerrillero que afronta exitosamente el reto de convertirse en partido político y es capaz de ganar la presidencia. Su victoria cambiaría la correlación de fuerzas a nivel centroamericano, donde habría una mayoría de gobiernos que se reclaman de "izquierdas" por primera vez en la historia. Quizá entonces se podrían acometer reformas estructurales a nivel regional, que en esta ocasión, esperemos, no dieran lugar a un nuevo ciclo de acoso, destrucción y muerte por parte del gobierno de los Estados Unidos.

## Trabajadores latinoamericanos de Londres en pie de lucha

En noviembre del año pasado se reunieron sindicalistas, campañas de solidaridad de América Latina y grupos pro-derechos de los migrantes en el corazón de la comunidad latina de Londres para escuchar a trabajadores latinoamericanos en pie de lucha en la capital.

La reunión se celebró en el Pullens Centre en Elephant and Castle y la convocaron la Asociación Latinoamericana de Trabajadores y la Campaña contra los Controles de Inmigración (CAIC). Sirvió para tomar el pulso de las últimas campañas, especialmente en el contexto de la actual recesión mundial, el aumento de los controles de inmigración y las redadas en los lugares de trabajo. (1)

### El caso Amey

El primer orador, Julio Mayor, es uno de los cinco cleaners (limpiadores) despedidos por Amey Plc en el National Physical Laboratory, y miembro de los sindicatos Prospect y Unite. Contó cómo Amey había comenzado a atacar las condiciones y niveles de dotación de personal de los 36 cleaners latinos después de asumir el contrato de limpieza en diciembre de 2006.

Amey es uno de los principales beneficiarios de los controvertidos private finance initiatives (PFIs) en el Reino Unido por los cuales el gobierno otorga jugosos contratos a empresas privadas para hacer obras en el sector público con dineros públicos. Pertenece a la multinacional española de la construcción Ferrovial la cual compró Amey cuando ésta quebró en el 2003. Gracias a la adquisición, Amey es ahora

un accionista mayoritario de la empresa Tubelines, dueño parcial del metro de Londres. En el verano del 2008 Tubelines fue sujeto de una huelga de los limpiadores del metro agrupados en el sindicato RMT y las empresas de limpieza contratadas por Tubelines aprovecharon las leyes de inmigración para perseguir a muchos activistas principales.

A los seis meses los trabajadores fueron engañados para que asistieran a una supuesta capacitación laboral y cuando llegaron al salón indicado fueron cercados por 60 policías y funcionarios de inmigración. A raíz de esta redada detuvieron a 7 trabajadores y deportaron a 3 de ellos: a Brasil y Colombia.

En septiembre de 2008 los 'Amey Five' fueron despedidos después de difundir un volante buscando el apoyo del personal del laboratorio. Desde entonces, se ha llevado a cabo una enérgica campaña en su nombre, con protestas en oficinas de Amey en todo el país y cobertura en diversos medios de comunicación de habla inglés y español. (2)

Las acciones recientes han incluido un piquete de solidaridad de oficinas de Amey en Bristol y Newcastle; una protesta masiva de profesores y estudiantes y personal de la Universidad de Kingston durante la visita del presidente de Amey, una ruidosa manifestación en la sede principal de Amey en Oxford apoyado por el Trades Council de Oxford y la

red No Borders; una intervención ante 300 asistentes a una reunión de apoyo a los Shrewsbury Pickets en Londres(3), y la realización de un video sobre la campaña. Estas y muchas otras acciones obligaron a la compañía en las negociaciones en febrero de 2009, sin embargo

Los trabajadores han rechazado la oferta de la compañía por indigna y según una entrevista concedida a Noticias han jurado seguir peleando aunque su sindicato no les sigue apoyando de manera oficial. (4)

### Trabajadores de Lancaster en en el banco Schroders

El segundo orador, Jaime, es miembro del sindicato Unite y trabaja para la empresa de limpieza Lancaster en Schroders Investment Management Ltd, una empresa mundial de gestión de activos. Describió su reciente lucha por un aumento salarial y en contra el intento de Lancaster de desmejorar sus condiciones de trabajo al despedir gente y cambiar los que quedaban a un turno nocturno. Inicialmente, la empresa amenazó con despedir a todos y contratar a nuevos trabajadores. Luego dijeron que concederían el aumento salarial pero sólo transfiriendo tres de los trabajadores a otro lugar de trabajo. Los trabajadores encargados de negociar se

negaron a dar una respuesta diciendo que tendría que decidir la asamblea de todos los trabajadores.

La asamblea decidió por unanimidad que no estaba de acuerdo con que se transfiera a un solo trabajador. En cambio decidió organizar una protesta fuera del banco. Lamentablemente los funcionarios sindicales de Unite gastaron más energías tratando de convencer a los trabajadores a que aplazaran la manifestación que ayudando a organizarla.

Cuando Jaime hablo con los trabajadores de Amey y se enteró de su lucha estos alentaron a seguir adelante con la campaña en Schroders - con o sin el sindicato. La manifestación siguió adelante con éxito a pesar del miedo de los trabajadores ante la reacción de la empresa. Luego enviaron una petición a Lancaster amenazando con más protestas si ésta no cambiaba de actitud. Entonces Lancaster se volvió a reunir con una delegación de los trabajadores y acordaron un aumento salarial sin condiciones.

Los trabajadores de Mitie en Willis

Desde la reunión, los limpiadores de Schroders han estado apoyando a sus hermanos y hermanas de clase que trabajan para Mitie en los edificios del corredor de seguros Willis. Cinco de ellos fueron despedidos en febrero de 2009 porque no podían pasar a un turno

nocturno que implicaba trabajar toda la noche. No es casual que se encuentran entre los despedidos activistas sindicales, entre ellos un delegado sindical. Esta reestructuración se dio en los talones de una campaña salarial.

A manera de respuesta se han realizado una serie de protestas en las afueras de los edificios de Willis con el apoyo de una serie de grupos, entre ellos limpiadores de otros edificios, el London Coalition Against Poverty, Movimiento Ecuador en el Reino Unido y el National Shop Stewards Network. Como mordeduras de la recesión mundial, es evidente que la reducción de costos es la excusa para que las empresas traten de erradicar a los activistas y, por tanto, debilitar la organización obrera. (5)

### Los cleaners de ISS en la Universidad de Londres

Robinson, un limpiador de ISS y miembro de Unison en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres describió cómo su lucha ha sido un largo proceso. Inicialmente los trabajadores habían sentido miedo y aislamiento. Así acordaron crear un ambiente de solidaridad para superar este miedo. Comenzaron con una muestra de la película Pan y Rosas para mostrar a los demás trabajadores que la organización era posible.

Luego se eligió un comité para liderar la lucha por sus

trabajan para los contratistas, por lo tanto, dividiendo la fuerza de trabajo. Otro denominador común es que las leyes de inmigración se utilizan específicamente para minar la organización obrera.

El debate se centró en dos cuestiones: los trabajadores indocumentados, y el papel de los sindicatos. Apoyamos o no las actuales demandas de regularización de trabajadores indocumentados, como plantea la campaña Strangers into Citizens con el apoyo de los dirigentes de grandes sindicatos como Unison y Unite? Un oficial de Unite hizo uso de la palabra para sostener que todos los grupos deben apoyar esta iniciativa de forma unida.

Otros argumentaron que la propuesta es divisiva ya que a algunos trabajadores se les darían papeles mientras que a otros no y estos últimos estarían en mayor riesgo de ser deportados. Igual que en los EE.UU. la protesta masiva por la regularización que tendrá lugar en Londres el 4 de mayo, sin duda estará marcado por el debate entre una amnistía para algunos o papeles para todos los documentos.

Dos de los oradores fueron muy críticos de cómo los sindicatos se habían comportado durante sus campañas con el uno diciendo que el sindicato había sido un observador más que un organizador y el otro señalando que mas que ayuda su sindicato había puesto obstáculos y que realmente son los mismos trabajadores que tienen que organizarse.

Para terminar la facilitadora de la reunión pidió a los presentes que apoyaran las futuras acciones y las campañas de los trabajadores y comentó que a pesar de las críticas del sindicato no somos anti-sindicales, que la gente debe organizarse y afiliarse a un sindicato pero que, en última instancia nosotros somos el sindicato.

Para obtener información actualizada sobre estas luchas escriba a [latin\\_americanworkers@hotmail.com](mailto:latin_americanworkers@hotmail.com)

(1) este artículo es una versión actualizada y modificada del original que se puede leer en <http://www.permanentrevolution.net/entry/2414>

(2) Véase [www.caic.org.uk](http://www.caic.org.uk). El video se llama 'Amey, Julio and Pedro' y se puede ver en <http://www.youtube.com/watch?v=ho7W4-RBhKc>. Véase también <http://www.youtube.com/watch?v=WJcQ6n7kTRI>

(3) Activistas sindicales de construcción injustamente encarcelados en los años 70. La campaña a su favor busca que el gobierno abra una investigación sobre el caso: plantón en el parlamento el 12 de marzo. Más información: [www.shrewsburypicketscampaign.org.uk](http://www.shrewsburypicketscampaign.org.uk)

(4) entrevista con Julio Mayor en Noticias de febrero 2009.

(5) Se ve un video de la protesta de los limpiadores de Mitie: <http://www.youtube.com/watch?v=8CaYVPQrIYs>

Para obtener mas información y dar un mensaje de apoyo, se haya contacto [williscleaners4justice@live.co.uk](mailto:williscleaners4justice@live.co.uk)

tels: Edwin 07931 464 890 o Alberto 07803 634 319



# Ecuador

## La "PACHAMAMA" en el Ecuador de hoy

El tema medioambiental se ha posicionado en el Ecuador actual al tope de la agenda política. El daño para la naturaleza ocasionado por un modelo económico basado en la extracción de los recursos naturales, al igual que en muchos países del "tercer mundo", ha

Por Fidel Narváez\*

sido devastador para el Ecuador. En especial la explotación petrolera, que sostiene a la economía ecuatoriana, ha sido inclemente con el medio ambiente, como lo demuestra la catástrofe ambiental que durante años ocasionó la empresa Chevron Texaco en la selva amazónica, conocida también como el "Chernobyl de la selva". A esto se suman las industrias camaronera, florícola y palmicultora, entre las más dañinas.

En medio de esta cruda realidad, la defensa del medio ambiente nunca tuvo mayor eco en el Ecuador, a pesar de las valientes luchas de los ambientalistas en contra de las transnacionales. Los activistas solían ser criminalizados por la justicia. Los medios de comunicación poca

atención le daban a los conflictos ambientales.

El Ecuador de hoy sin embargo presenta otro escenario. Resulta paradójico que cuando el país ha dado el giro político más radical de su historia moderna, con propuestas ambientalistas de avanzada que han recibido la atención mundial, los cuestionamientos de los ecologistas radicales reciban de repente el interés de la oposición al gobierno y de los medios de comunicación a los que nunca les importó la naturaleza.

El gobierno de Rafael Correa, en una acción sin precedentes, propició la amnistía de cientos de ambientalistas y luchadores sociales que estaban perseguidos por las cortes. Ha redoblado esfuerzos para

combatir la deforestación e imponer su autoridad por sobre las empresas particulares que por siempre han agredido a la naturaleza. Ha lanzado propuestas originales como la iniciativa ITT, en la cual por primera vez un país subdesarrollado que depende del petróleo plantea dejar sus mayores reservas de petróleo bajo tierra, para preservar intacto el parque nacional YASUNI, uno de los lugares más biodiversos del mundo. Ha revertido el 97% de las concesiones mineras para que luego puedan someterse a una nueva ley de minería que, a pesar de haber tenido una controversial aprobación, es la más rígida de la región en términos de controles medioambientales. La nueva constitución ecuatoriana es considerada por muchos como la más "verde" del mundo.



## La Ley De Minería Evidencia La Existencia De Dos Izquierdas

Las recientes protestas indígenas en el Ecuador son la prueba de la aparición de un grado de tensión entre dos izquierdas,

Por Samuele Mazzolini\*

que muestran tener ideas distintas respecto al camino del proceso revolucionario ecuatoriano. En el centro de la disputa ha estado la nueva ley de minería, un anunciado punto de choque entre el Presidente Rafael Correa y algunos sectores del movimiento indígena.

Correa ha defendido desde el principio la necesidad de una nueva forma de minería que introduzca una considerable atención a la responsabilidad ambiental, y que agrande la participación del estado ecuatoriano en términos de regalías, impuestos, y a través de la creación de una compañía nacional minera. En general, la ley requerida por el oficialismo da un claro giro progresista con respecto a la anterior.

Todo esto no ha sido considerado suficiente por la CONAIE, la más grande organización indígena del Ecuador, y por los ecologistas, que han intentado bloquear la aprobación de la nueva ley. Sus argumentos apuntan a los daños ambientales causados por la minería, en particular la minería a cielo abierto. Las preocupaciones concernientes a la contaminación del agua y del aire han sido sus mayores reivindicaciones, asegurando que las disposiciones ambientales no son suficientes para impedir los efectos perjudiciales de esta actividad.

Correa por contrario ha advertido que 'no podemos vivir como mendigos sentados en un saco de oro', subrayando los problemas presupuestarios del estado, dada la bajada de los precios y de las reservas de petróleo, y la dificultad de emprender, sin los recursos necesarios, los proyectos sociales y productivos tan necesitados, que su concepción de desarrollo conlleva y que la nueva Constitución prescribe.

Es así que el día 20 de enero, la movilización nacional anti-minera ha tomado lugar, tras una secuela de manifestaciones anteriores. Contrariamente a los levantamientos de la década de los '90, estas protestas no han sido capaces de juntar mucho consenso. La razón tiene que ser buscada en la fractura que el movimiento indígena ha vivido en los últimos años, con el encerramiento del liderazgo de la CONAIE en una política sectaria que ha privilegiado reivindicaciones comunitarias por sobre consideraciones nacionales más amplias, después de la inapropiada participación en el gobierno de Gutiérrez. Sin embargo, esta línea no ha sido compartida por todo el movimiento indígena, como confirmado por la posición de amplios sectores.

Si es cierto que el diálogo podría haber sido profundizado más sobre un tema tan sensible, es innegable que muchas de las preocupaciones expresadas por los ecologistas y los indígenas fueron incorporadas. Sin embargo, destaca el desarrollo de dos discursos fundamentalmente diferentes. Por un lado, los sectores ambientalistas están cuestionando un número de proyectos que Correa está emprendiendo, basándose en la incuestionable defensa del medio ambiente. A la vez, son críticos de las actividades mineras y petroleras, por la acentuación del modelo extractivista.

Por el otro lado, Correa tiene en la mente un modelo de desarrollo con el principal objetivo de garantizar estándares de vida decentes para toda la población, un modelo que conlleva un incremento del consumo para los sectores populares y la mejora de las asimetrías económicas. También es consciente que el extractivismo no puede ser un modelo para el desarrollo sustentable, pero reconoce la importancia de generar los fondos necesarios para crear un nuevo aparato productivo.

\* Estudiante de post-grado en la Universidad de Oxford

## Deuda Ecuatoriana: "Atraco millonario a la dignidad"

La Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) de Ecuador, conformada por analistas mayoritariamente extranjeros, catalogó a la deuda ecuatoriana como un "un atraco millonario".

Por Diego Almeida

Hugo Arias, coordinador de la comisión, señalaba que más del 80% del monto total corresponde a refinanciamientos, que mientras el Ecuador recibió cerca de US\$ 80 billones en créditos, hasta la fecha se han pagado US\$ 127 billones y que existen claros los indicios de ilegalidad, abusos e ilegitimidad con gobiernos, acreedores privados y multilaterales.

Los casos de corrupción de funcionarios de anteriores gobiernos, así como de espurios contratos y negociaciones son ampliamente documentados en el informe de CAIC. Quizás uno de los casos más notorios señala a dos personas que decidieron, unilateralmente por el pueblo y estado ecuatorianos, renunciar al derecho de prescripción de la deuda por más de US\$ 7 billones, reviviendo la deuda y añadiendo a ella multas por mora, gastos administrativos y extras.

Tras haberse presentado el informe de la auditoría oficialmente en el último trimestre del 2008, el gobierno empezó a tomar medidas al respecto; entre las que se cuentan, la declaración de mora técnica en noviembre 2008; posteriormente, tras caducarse el plazo, la declaratoria del 'default' de los bonos Global 2012, de la mano con el anuncio de la presentación de planes de reestructuración de la deuda.

El presidente Correa ha reconocido que no todos los bonos Global son ilegítimos, razón por la cual se buscará llegar a acuerdos con los acreedores; sin embargo, los tramos plagados de corrupción e ilegalidad, en los que muchas veces no se puede ni siquiera reconocer el destino de los fondos, serán llevados a cortes internacionales. Los bonos Global equivalen al 39% del total de

La "PACHA MAMA", o "madre tierra", ha adquirido el protagonismo que merece en la agenda política del Ecuador, generando expectativas enormes en los sectores ambientalistas más radicales. Nada de esto hubiera sido posible sin embargo sin la insurgencia de un gobierno nacionalista que se ha propuesto como horizonte estratégico sacar al Ecuador del neoliberalismo.

Al final de cuentas, si la mayor oposición al gobierno de la revolución ciudadana viene del "ambientalismo radical", no es sólo buena señal para la PACHA MAMA en general, sino también una muestra de que en otros grandes temas, como la redistribución de la riqueza, por ejemplo, el consenso social que se va alcanzando en el Ecuador de hoy es mucho más sólido y alentador.

\* Fidel Narváez, activista de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador y del Movimiento Ecuador en el Reino Unido, MERU.

la deuda pública externa ecuatoriana, que en octubre se situó en US\$ 9.93 billones de dólares, lo que representa un 19% del PIB.

Como medida futura, el Ecuador propone la creación de un ente de arbitraje internacional de deuda soberana en las Naciones Unidas mientras que se prepara jurídicamente para presentar los casos que considera ilegales ante las cortes internacionales.

En un caso particular, la constructora Norberto Ordebrecht (Contratista Brasilera) tuvo a cargo la construcción de una planta hidroeléctrica, entre otros varios proyectos; sin embargo, dicha planta presentó problemas estructurales y tuvo que ser cerrada luego de apenas unos pocos meses de funcionamiento, lo cual ocasionó pérdidas al estado a la vez que tuvo que afrontar los gastos por reparación.

El levantamiento de este proyecto se llevó a cabo con un préstamo del banco brasilero BANDES, el mismo que desembolsó más de US\$ 200 millones directamente a las arcas de Ordebrecht, aun cuando, es el estado Ecuatoriano quien tiene que honrar la deuda.

En estas circunstancias, el gobierno del Ecuador, decidió impugnar la deuda y recurrir a la cámara de comercio internacional de París para presentar el caso.

Tanto en este como en varios otros tramos de la deuda Ecuatoriana, el gobierno tiene un claro interés en desentrañar las circunstancias en las cuales fueron celebrados los contratos, identificar responsables penales (de proceder) y sobre todo que reine el precepto bajo el cual una deuda contraída con un estado, a diferencia de una deuda comercial, su función debe necesariamente radicar en lo social.

\* Diego Almeida, estudiante de Política y Relaciones Exteriores en London School of Economics and Political Science, miembro del MERU.

## Autonomismo cruceño llama a la "desobediencia civil" para defender la tierra de 5 terratenientes



Stavenhagen enfatiza que es fundamental que el Estado boliviano les garantice acceso a la tierra y reconozca sus territorios tradicionales. Por eso recomendó al gobierno dar prioridad a la Ley de Reconducción Agraria.

### Los temores de los terratenientes

Según Sattori, la reversión de tierras en Cordillera busca el avasallamiento de toda la tierra cruceña. Por su parte, el presidente del Comité Cívico Luis Núñez sospecha que el gobierno pretende conformar tierras comunitarias indígenas y campesinas autónomas como "enclaves" en diferentes partes del país, para detener la actual división política y restar poder a la prefectura del departamento.

El 23 de febrero de este año, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos y libertades de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, destacó los esfuerzos del gobierno boliviano para la erradicación de la esclavitud y la servidumbre a la que se ven sometidas las comunidades indígenas. A la vez, manifestó la necesidad de que se continúe la devolución de tierras a las comunidades, a través de la dotación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO).

Cinco días antes, el prefecto de Santa Cruz Rubén Costas, dirigentes cívicos y empresariales, alcaldes y terratenientes de Santa Cruz habían iniciado nuevas movilizaciones para evitar la reversión de 10 haciendas en la provincia Cordillera que no cumplen una Función Económica Social (FES) y que aprovechan la mano de obra servidumbre de más de 50 familias guaraníes. Estas 10 haciendas están distribuidas en 36.425 hectáreas y pertenecen a 5 propietarios, entre ellos, la familia del terrateniente norteamericano Ronald Larsen.

Los cívicos y empresarios se declararon en "desobediencia civil" contra la política de tierras "confiscatoria" del gobierno: "Defenderemos el territorio de la provincia Cordillera, y no vamos a permitir atropellos ni la reversión de tierras, porque este pueblo nunca fue dominado ni vencido", dijo el prefecto Costas; "es una protesta no violenta para cambiar una política" que despoja propiedades productivas, explicó Nayyar.

### ¿Confiscación o devolución de territorios indígenas?

El gobierno de Evo Morales ejecuta transformaciones políticas, jurídicas e institucionales que reivindican la identidad cultural y social de los pueblos indígenas reprimida durante siglos. El objetivo es revertir la situación de exclusión y marginalización de la población indígena mayoritaria, describe el ex relator Stavenhagen.

Pese a los avances en materia de derechos de los pueblos indígenas, entre ellos la Constitución Política del Estado aprobada en el referéndum del 25 de enero,

Especialistas de Naciones Unidas e instituciones de derechos humanos coinciden en que la manera más efectiva de restituir el territorio histórico de indígenas despojados y semi-esclavizados es redistribuir la tierra expropiada a los latifundios que no cumplen la Función Económica Social.

Algunos sectores políticos y de la industria agroganadera y forestal, sobre todo en los departamentos orientales, no están de acuerdo con esta política agraria. La confrontación entre estos

**Frente a la decisión gubernamental de devolver los territorios a los guaraníes, y la recomendación de Naciones Unidas de continuar con la reconducción agraria, el prefecto de Santa Cruz y los empresarios cruceños rechazan un "enclave" indígena en Alto Parapetí**

sectores y el gobierno central ha generado un preocupante rebrote del racismo, incluyendo ataques físicos y verbales contra dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos.

### Acciones gubernamentales

El gobierno reanudó el saneamiento en la región de Alto Parapetí, territorio guaraní, en noviembre del año pasado y advirtió que usará la fuerza legal y constitucional para lograr su objetivo. Sin embargo, los terratenientes derrotados volvieron a las trincheras en febrero de 2009.

El prefecto Costas y sus pares rechazaron varias invitaciones del gobierno para debatir la implementación de las autonomías departamentales y, en cambio, se articularon en comités de defensa de las haciendas improductivas.

"Lo que está cada vez más claro es que hay terratenientes que hablan a nombre de la región y utilizan los mecanismos corporativos de poder en Santa Cruz para defender sus negocios mal habidos, en vez de trascender sus intereses mezquinos y ver la perspectiva histórica del país en su conjunto", criticó el ministro de Autonomías Carlos Romero.

El poder político y patronal cruceño teme que la Tierra comunitaria de Alto Parapetí se declare territorio indígena autónomo, y que la Prefectura deje de recibir las regalías de la zona, que concentra el 80% de las reservas hidrocarburíferas. "El gobierno quiere beneficiarse con los 5.000 millones de dólares que generará el pozo Incahuasi", alertó el ganadero Náyay.

El rasgo común de la elite político empresarial de Santa Cruz, vanguardia del movimiento autonomista opositor, es la posesión de enormes predios agrarios. El INRA estima que en este departamento, el más extenso del país, 24 empresarios tienen haciendas de más de 20 mil hectáreas, mientras 40 familias centralizan el poder económico y social en la región.

Prominentes líderes autonomistas han gozado de este poder político. Es el caso de Guido Náyay, quien fue ministro de Gobierno y hombre de confianza del ex dictador Hugo Banzer. Renunció a este cargo, acusado por violar sistemáticamente los derechos humanos en Chapare en sus 22 meses de gestión. Lo vincularon con la muerte del ciudadano peruano Freddy Cano López, torturado y quemado vivo en las celdas de Interpol en La Paz. La Defensoría del Pueblo involucró a Náyay en el intento de incautación de un número de la revista R que informaba detalles sobre el Plan Cóndor.

Durante la revuelta terrateniente del año pasado, Náyay dijo que "la lucha de los departamentos autónomos ya no es por IDH, sino por la libertad" y llamó a defender con las armas y entregar la vida por las tierras cruceñas. Luis Núñez, nuevo líder cívico, ex presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, maneja el mismo discurso

En el fondo, este pequeño grupo empresarial está defendiendo su lucrativo negocio agroexportador, en alianza con multinacionales proveedoras de semillas, fertilizantes y herbicidas como Monsanto, Bunge, Dreyfus o ADM, y acopiadoras de granos como Cargill.

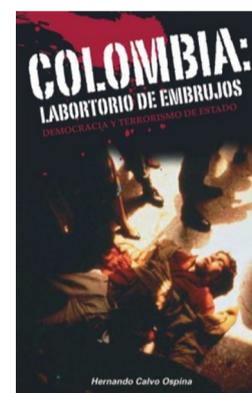
Artículo de <http://www.bolpress.com/>

## Colombia: Laboratorio de Embrujos

Continuación de la página E2

podrían conjugar todos los verbos y usar todos los apelativos, adjetivos, sinónimos y metáforas para describir la violencia, las mil y una guerras declaradas y no declaradas entre hermanos, la capacidad del Estado colombiano y sus aparatos de seguridad para implantar el terror oficial entre la población a lo largo y ancho de toda la geografía Nacional, y nunca lograríamos acertar en el uso de la sintaxis correcta para describir el horror y el infierno que padecen los colombianos cuando se atreven a disentir de los gobiernos de turno y osan alzar su voz contra la injusticia.

Es admirable la pericia de investigador riguroso de Hernando Calvo, cuando logra hilar tan delgado entre la maraña oscura y los entresijos enrevesados que convierten la historia colombiana en un galimatías apto solo para expertos que puedan



desentrañar la cínica mentira oficial celosamente escondida y distorsionada en los textos oficiales de educación o en los libros de historia, escritos por los falsos historiadores que reciben por parte de las élites del poder, el encargo fatídico de borrar, o cuando menos, distorsionar la memoria histórica del pueblo colombiano, pintando así un cuadro ficticio, un paraíso sin historia, sin pasado, para consumo de la nuevas generaciones.

Colombia, laboratorio de embrujos, podría entenderse más bien como un laboratorio de violencia, de terror oficial, donde se han aplicado los métodos más salvajes y retrógrados para garantizar la sumisión de un pueblo. Colombia es en razón de este trabajo un país signado por una violencia endémica, dirigida, administrada y aplicada con cínica pedagogía desde las altas esferas del poder estadounidense y su maquinaria de guerra como el Pentágono y la CIA, entre otros. Colombia, al igual que muchos otros países del mundo ha sido ese terrible y funesto laboratorio donde se han planeado los más indescritibles crímenes contra su propio pueblo, crímenes atroces de lesa humanidad que avergüenzan al mundo y que han quedado impunes porque para el imperio sus crímenes no son tales, sino actos de gobierno que garantizan su Seguridad Nacional.

Naturalmente, tales máquinas de guerra imperial siempre han

necesitado de unos operarios para garantizar el éxito de tan inhumano trabajo. Esos conductores, desafortunadamente y para vergüenza del propio pueblo colombiano, han sido, como claramente lo confirma el autor, sus propios gobernantes en cabeza de los presidentes de la república, líderes políticos de los partidos Liberal y Conservador, Instituciones Públicas e Instituciones Armadas del estado; todos a una puestos al servicio de los intereses extranjeros y de unas cuantas familias criollas que continúan manejando el país al mejor estilo de las antiguas colonias españolas.

Lo anterior lo confirma Hernando Calvo desde las primeras páginas de su libro cuando nos muestra por entre los resquicios de la historia, como desde los albores de la república se gesto el nicho de la violencia que marcaría los siglos venideros de un país que dio en llamarse democrático y libre. Las luchas intestinas por el poder han anegado en sangre el suelo colombiano desde

aquella infausta noche en que el General Santander atentó contra la vida del Libertador Simón Bolívar. Manuelita Sáenz quien se interpuso valientemente a los asesinos y logró salvar la vida del Libertador, se convirtió así en una de las víctimas pioneras en Colombia del terrorismo de Estado. Así como ella, hoy miles de colombianos son señalados y perseguidos, torturados y asesinados, encarcelados y exiliados como enemigos de la patria por el solo hecho de disentir de las políticas oficiales y protestar contra los actos de gobierno que lesionan los derechos de los ciudadanos y porque se oponen a las masacres de campesinos indefensos, al etnocidio de comunidades indígenas y comunidades afro descendientes.

Los victimarios también continúan siendo los esbirros del Estado, quienes merodean la torta del poder, a la espera de las migajas. Migajas se traducen en completa impunidad, en la justicia sorda y ciega, en el imperio de la corrupción, en el auge del narcotráfico, en la aprobación de una Ley como la de Justicia y Paz, hecha a la medida de los peores asesinos de las bandas de paramilitares y evitar así pagar por sus crímenes.

En síntesis, Colombia: laboratorio de embrujos es un compendio de las peores prácticas del terrorismo de Estado y de la capacidad infinita de las castas del poder para perpetuarse en el.